

C.A. de Santiago

Santiago, seis de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos RIT 562-2024 del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, RUC 2400252806-8, por sentencia de catorce de abril de dos mil veinticinco, se condenó al sentenciado BRAYAN ANTONIO ARAUJO PEÑA, a la pena única efectiva de diecisiete años de presidio mayor en su grado máximo, accesorias legales, multa de cinco unidades tributarias mensuales y huella genética, como autor de los delitos consumados de robo calificado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma y municiones, perpetrados el 4 de marzo de 2024 en la comuna de Santiago, de esta ciudad.

En contra de esta sentencia la defensa dedujo recurso de nulidad fundado en dos causales. La primera correspondiente a la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letra c), d) y e, esto es, la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297. La segunda causal es la establecida en el artículo 373 letra b) del mismo código, esto es, “Cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido en lo sustancialmente dispositivo del fallo.”

El veintisiete de mayo último esta Corte oyó a los apoderados de las partes recurrente y recurrida y fijó el día de hoy para la suscripción de esta sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en relación a la primera causal, la defensa luego de una extensa transcripción del fallo impugnado -que ocupa el mayor espacio del recurso-, correspondiente al considerando noveno donde se da por establecido el hecho por el que se acusó y el basamento décimo que valora la prueba rendida en relación a cada uno de los delitos por los que fue condenado, presenta su libelo impugnatorio con la siguiente estructura inicial: *“A juicio de esta defensa se debe llegar a un estándar de convicción, pues, para que sea posible condenar a un sujeto de acuerdo con los términos*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KLZXXWGXLQE

fácticos de la acusación, el juzgador debe, necesariamente, alcanzar un nivel de certeza respecto de la ocurrencia de los hechos atribuidos y la participación del encartado, que sea capaz de descartar toda duda razonable. Es así, que, si bien el persecutor incorporó prueba suficiente para sustentar la acusación del delito de tráfico ilícito de drogas, en que se arribó a decisión de condena, no ocurrió lo mismo respecto de la imputación de los delitos de robo agravado con retención, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones, tal como se detallará.”

La defensa con lo anterior impugna como defecto de la de la sentencia lo que se conoce en doctrina como la distribución del error, esto es, una infracción al estándar de la duda razonable, contemplado en el artículo 340 del Código Procesal Penal. Lo anterior únicamente para el robo calificado y los delitos de infracción a la Ley de Armas, pues no discute el delito de la Ley 20.000.-

A continuación, expone en relación con el ilícito de robo calificado con retención lo siguiente: *“A juicio de esta defensa no se dan los presupuestos del tipo, y en ese ámbito de cosas malamente se podría establecer la circunstancia calificante acogida por el tribunal recurrido.”*

Reproduce nuevamente el análisis realizado por el fallo con relación a la declaración de la víctima Julián Belalcázar Ochoa, del funcionario policial carabinero Víctor Martínez Matamala, en relación con la ayuda prestada a la víctima cuando ésta logró salir del furgón donde se encontraba retenida, luego que el acusado con otro sujeto la suben bajo amenaza y proceden a sustraer especies de su propiedad. Funcionario que junto a su acompañante lograron detener al acusado que conducía el furgón desde donde huyó la víctima, luego de un seguimiento.

La defensa reclama que a tales afirmaciones le faltan elementos externos para acreditar tal hecho, lo que no puede suplirse con lo depuesto por el funcionario policial.

Resulta relevante detenerse acá, porque ahora la defensa cambia el sentido de su libelo impugnatorio, ya no estamos en presencia de una distribución del error como había anunciado, sino que, con un problema de disminución del error, lo propio de los artículos 342 y 297 del Código Procesal Penal



El recurso lo afirma de este modo: *“En ese ámbito de cosas queda establecido el ilícito de robo con retención por los solos dichos de la víctima, la que, si bien se acerca al funcionario policial a pedir auxilio, no es menos cierto, que tenemos una denuncia realizada por la supuesta víctima a los funcionarios policiales, es decir tenemos una afirmación a la que le faltan elementos externos para acreditar el hecho y esto no puede suplirse por lo depuesto por los funcionarios policiales.*

En ese orden de ideas, Nuestra normativa al referirse a la valoración de la prueba hace referencia a los medios de prueba en que se fundamentan las conclusiones, tanto del delito como de la participación del acusado, es decir se exige la concurrencia de pruebas múltiples.”

Concluye conforme a lo anterior que se transgrede el principio de corroboración al siguiente tenor: *“ya que se le está dando un valor probatorio a lo depuesto por la víctima que si bien es cierto es veras (sic), en cuanto a sus dichos, se acerca a pedirles ayuda, y tenemos las grabaciones de las cámaras del sector en las que se ve a la persona bajar del vehículo y correr.”*

Adiciona que se afecta también el principio de la razón suficiente, lo que no es más que la razón unívoca de los antecedentes que sirven para dar por establecido un hecho esgrimido por las partes y en este nivel concluye al siguiente tenor: *“A juicio de esta defensa, tomando en cuenta la prueba que se rindió no estamos frente a una razón univoca, para dar por establecido un hecho, toda vez que se deben cumplir ciertos estándares superiores para llegar a un fallo condenatorio.”*

Ahora la defensa retorna a la primera alegación de la distribución del error, pues una vez más abordar el tema del estándar.

Finalmente critica a la sentencia porque esta no deja constancia del contrainterrogatorio realizado por la defensa a la víctima y los funcionarios policiales que participaron en la detención, lo que implica que la misma carece de fundamentación precisa sobre los hechos y el derecho en que se basa la decisión adoptada, pues la simple relación de los documentos del procedimiento no sustituirá en caso alguno la fundamentación.

Por último, la defensa vuelve al problema de la distribución del error, pero a diferencia de lo anterior no reclama una relación defectuosa de la sentencia, sino una relación de ausencia de información.



SEGUNDO: Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: *“Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)”*.

Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, en su letra c) señala: *“Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”*.

A su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal expresa que *“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”*.

“El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”.

“La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia”.

TERCERO: Que puede observarse la falta de rigor conceptual y analítico que el recurso presenta, considerando que es de derecho estricto.

Naturalmente el anuncio de la falta de rigor en la aplicación de las reglas de los artículos 342 y 297 del Código Procesal, en relación con los ilícitos de la ley de armas (porte ilegal de arma de fuego y de municiones) es simplemente una referencia escrita sin ningún contexto. No hay impugnación alguna en este punto.

La falta de rigor analítico del recurso impugnatorio en este apartado es indiscutible, irrefutable, claro y patente, no se trata de un discurso que pueda ser calificado de implausible o irracional, es simplemente inexistente.

Sólo un oxímoron puede dar cuenta de esto: se trata de un silencio atronador.



En lo que toca a la impugnación del robo calificado el recurso resulta conceptual y analíticamente confuso como se indicó, pero además totalmente contradictorio.

Tal como se mencionó en el considerando segundo, la defensa comienza con una impugnación general de distribución del error a la sentencia, en orden a que esta no respetó el estándar del artículo 340 del Código Procesal Penal, sin mayor referencia específica.

Luego, trata la disminución del error a través de los artículos 342 y 297 del mismo texto legal al denunciar la falta de elementos externos a la declaración de la víctima y del funcionario policial para acreditar el delito, para seguidamente indicar que ese elemento externo no puede suplirse por la declaración del funcionario policial.

Conforme a lo anterior, entiende que existe una afectación al principio de corroboración porque, aunque la víctima no se encuentra sujeta a reproche alguno en su discurso, pues textualmente señala el libelo: *“...ya que se le está dando un valor probatorio a lo depuesto por la víctima que si bien es cierto es veras (sic)”*, añade: *“...y tenemos las grabaciones de las cámaras del sector en las que se ve a la persona bajar del vehículo y correr.”*

Es indesmentible la falta de rigor analítico y conceptual del discurso impugnatorio. Confunde la distribución del error con la disminución del error y en esta última se contradice de forma evidente, ya que admite que la declaración de la víctima está corroborada con la declaración del funcionario policial, pero luego niega que tal conexión cuente como una corroboración externa, agregando que no existe ninguna otra, para luego admitir que existen grabaciones que refrendan a una víctima; víctima, además, que el mismo recurso la trata como veraz.

Hasta ahora el recurso admite dos pruebas externas que ratifican a la víctima en el fallo, la declaración del funcionario policial y la existencia de grabaciones. En relación con la primera, el recurso no explicita la razón para que la declaración del funcionario policial no cuente como válida, sólo afirma que no es un elemento de corroboración externa y con relación a la segunda -las grabaciones- que corroboran los dichos de la víctima en la sentencia, aparentemente tampoco serían elementos de corroboración externo, ¿por qué razón?, el recurso no lo dice.

Pero los errores discursivos no terminan acá.



En efecto, el arbitrio continúa con su más que *sui generis* relato afirmando la falta de razón suficiente: *“A juicio de esta defensa, tomando en cuenta la prueba que se rindió no estamos frente a una razón unívoca, para dar por establecido un hecho, toda vez que se deben cumplir ciertos estándares superiores para llegar a un fallo condenatorio.”*

Nuevamente el recurso impugna los estándares, lo que significa que debe haber otro estándar adicional a la duda razonable, pero ¿cuál es ese otro estándar?, ¿qué regla legal lo contiene?, ¿cómo opera?; el recurso nada dice y ello es obvio, no hay más que un único estándar, el de la duda razonable.

Finalmente, el libelo impugnatorio critica a la sentencia porque la misma no abarca el contrainterrogatorio realizado por la defensa a la víctima y los funcionarios policiales que participaron en la detención, lo que implica que la misma carece de fundamentación sobre los hechos y el derecho en que se basa la decisión tomada, pues la simple relación de los documentos del procedimiento no sustituirá en caso alguno la fundamentación.

Ahora la defensa vuelve al problema de la distribución de error, pero el análisis ya se vuelve simplemente incomprensible.

El recurso termina alegando un error en la corroboración porque no se consigna el contrainterrogatorio a la víctima y al funcionario policial, lo que resulta necesario porque no basta la transcripción de documentos.

Ahora la defensa admite que existen documentos, ¿cuáles son esos documentos que para la defensa tampoco valen?, no sabemos, pero no cuentan para fundar nada porque sólo fueron transcritos en la sentencia, o sea, la defensa admite que hay más pruebas que la declaración de la víctima, pues están los dichos del funcionario policial, grabaciones y documentos, pero ninguno cuenta por alguna razón que no se conoce, pues el recurso sólo se dedica a realizar afirmaciones.

Se puede seguir con la lógica interna del propio recurso, si el funcionario policial no cuenta como corroboración externa por alguna razón que el recurso no enuncia ni menos argumenta, ¿por qué es un defecto para la defensa que no haga constar su contrainterrogatorio?, una vez más nada se dice.

Finalmente, si el recurso admite que la víctima es veraz, ¿por qué es relevante que la sentencia no transcribiera o hiciera constar el



contrainterrogatorio de la defensa a la víctima? Nuevamente, el recurso carece de toda explicación.

Por supuesto que el recurso no describe las preguntas relevantes de ese contrainterrogatorio que sirven para construir un enunciado probatorio favorable o construir un argumento para desacreditar un enunciado probatorio desfavorable a su pretensión, lo que naturalmente es de su cargo.

La mejor versión para calificar un recurso de estas dimensiones es que el mismo entiende que se pueden impugnar los razonamientos de la sentencia a través de actos preformativos, lo que evidentemente es algo más que una simple audacia argumentativa.

El recurso nunca precisó la efectiva afectación al estándar de la duda razonable, que está contenida en el artículo 340 del Código Procesal Penal, que establece: *“Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.*

El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral.

No se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración.”

Tampoco logró tratar diferenciadamente el problema de la disminución del error al interior del juicio, la llamada valoración de la prueba, que se encuentra contenido en el modelo analítico dialéctico de los artículos 297 y 342 del Código Procesal Penal y el problema de la distribución del error al interior del juicio, el estándar de prueba se encuentra gobernado por la regla legal del artículo 340 del Código Procesal Penal.

En doctrina se establece que para la defensa es suficiente la negación externa del enunciado “está probado que p” (sea p cualquier hecho, en el presente juicio que el acusado cometió los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de la víctima). Es decir, la defensa no necesita probar que no-p (negación interna), le basta negar que “p” esté probado (negación externa). En efecto, *“la negación interna del enunciado afirma la prueba de una proposición: en concreto, de la proposición que describe la no-ocurrencia de un hecho. En cambio, la negación externa del enunciado “No está probado*



que p”, no dice nada acerca de la ocurrencia o no de hecho alguno (externo al proceso): simplemente afirma la falta de elementos de juicio suficientes para considerar probada la ocurrencia de un hecho”. (Jordi Ferrer Beltrán, Prueba y Verdad en el Derecho, Marcial Pons, 2002, Barcelona, pág.40-41.)

Esta es la primera pregunta al interior del juicio: ¿existe prueba suficiente para dar por acreditado los enunciados probatorios que acreditan los delitos y aquellos que acreditan la participación culpable del acusado en ellos?.

Una pregunta diversa, que aparece luego de contestar afirmativamente la anterior, es si existe alguna hipótesis alternativa que rivalice en la interpretación de los enunciados imputados probados, de suerte que éstos no logren superar el estándar que exige la distribución del error. En palabras de la doctrina nacional: *“los defectos de las pruebas disponibles respecto de una cierta proposición sobre los hechos del caso que justifican una duda e impiden tenerla por probada bajo el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, consisten en que ellas no logren eliminar o refutar alguna proposición fáctica alternativa plausible y compatible con la inocencia del acusado. Una interpretación semejante del estándar de prueba más allá de toda duda razonable ha sido sostenida por Michele Taruffo en Italia y por Paul Roberts y Adrian Zuckerman en el Reino Unido.”* (Daniela Accatino, Certezas, dudas y propuestas en torno al estándar de la prueba penal, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso no.37, Valparaíso, dic.2011).

Ni siquiera es necesario mirar la sentencia para desestimar el recurso, aunque en una lectura somera se puede ver en sus considerandos décimo, duodécimo, décimo tercero que abordó lo debatido en juicio, realizando la construcción de los enunciados probatorios con la prueba rendida y relacionando tales enunciados con los conectores que la sana crítica autoriza.

CUARTO: Que, en síntesis, el libelo impugnatorio como advierte en su clasificación la doctrina nacional, no acredita una ausencia de información, sea por falta de identificación total o parcial de los enunciados probatorios o de los elementos de juicio (medios de prueba) que justifican cada enunciado probatorio; tampoco demuestra una fundamentación incompleta, sea por insuficiencia interna del texto de la sentencia, como su falta de expresión de la relación de corroboración entre elementos de juicio y enunciado probatorio,



o por insuficiencia en relación al proceso -omisión absoluta de consideración de algún medio de prueba aportado o también por omisión parcial de consideración de algún medio de prueba y finalmente no acredita una fundamentación defectuosa, en términos de la existencia de contradicción lógica de afirmaciones contenidas en la sentencia, defectos en el uso de máximos de la experiencia, falta de descarte de las circunstancias que harían inaplicable la máxima de la experiencia al caso concreto, o defectos relativos a los conocimientos científicamente afianzados: uso, expreso o tácito, de generalizaciones que contrasten con conocimientos científicamente afianzados. (Daniela Accatino en “El modelo legal de justificación de los enunciados probatorios”, en “Formación y Valoración de la Prueba en el Proceso Penal”, Abeledo Perrot, 2010, página 143)

El recurso en esta parte debe ser desestimado.

QUINTO: Que en relación con la segunda causal el recurso señala: *“Sin perjuicio de lo señalado el tribunal recurrido, condena a Bryan Araujo por el delito de tenencia y no de Porte como lo había sostenido el ente persecutor tanto en su acusación como en el transcurso del juicio, sin abrir debate al objeto de permitir a las partes debatir sobre una eventual recalificación. En oposición a lo señalado en el artículo 341 de nuestro Código Procesal Penal, Toda vez que la sentencia supero a los hechos descritos en la acusación, condenando por un hecho no contenida en ella, siendo un vicio trascendental.”*

Que si se esgrime la causal de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, esta Corte no puede alterar los hechos contenidos en la sentencia. Dicha norma refiere que *“Procederá la declaración de nulidad total o sólo la parcial del juicio oral y de la sentencia, si el vicio hubiere generado efectos que son divisibles y subsanables por separado sólo respecto de determinados delitos o recurrentes: b) Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación el derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”.*

En lo que interesa a la causal específica, artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, se busca impugnar una errónea interpretación del derecho, que la doctrina nacional, mirando la jurisprudencia de los tribunales superiores, ha sintetizado: “Por su parte, los errores en la premisa normativa podrían generarse por circunstancias como las que siguen:



a) ignorancia del derecho,
b) problema en la identificación de disposiciones o textos de las fuentes del derecho,

c) defectos en la interpretación y argumentación; o, uso de falacias.”
(Fundamentos Filosóficos del Derecho Procesal, Daniela Accatino, Flavia Carbonell y otros autores, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, página 315)

Nuevamente los fundamentos del propio tenor del recurso, conceptualmente no tiene relación alguna con la causal que invoca.

En efecto, no llamar a recalificar el delito en los términos del artículo 341 del Código Procesal, apunta directamente a una afectación del debido proceso, que en principio y de forma natural corresponde a la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, por tratarse de una infracción a una garantía constitucional. Naturalmente se podrían teorizar ciertas circunstancias, muy particulares, que podrían dar lugar a constituir una infracción al impedimento de ejercicios específicos de la defensa técnica, pero aquello está en la causal del artículo 373 letra c) del Código Procesal Penal.

En lo que toca a la afirmación que se condenó por un hecho no contenido en la acusación, la respuesta es trivial y obvia, para ello está la causal del artículo 374 letra f) del Código Procesal Penal.

Al igual que en la primera causal, no es necesario siquiera mirar la sentencia para desestimar el recurso en la causal invocada en este acápite.

Que todo lo anterior llevará al rechazo del recurso.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se desestima** el recurso de nulidad deducido por el Defensa en contra de la sentencia de catorce de abril de dos mil veinticinco, dictada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Redacción del ministro interino señor Avilés.

Regístrese y devuélvase.

N°Penal-2164-2025.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KLZXXWGXLQE



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KLZXXWGXQE

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V., Ministro Suplente Luis Avilés M. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, seis de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a seis de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KLZXXWGXLE